

MORTALIDAD SEGÚN OCUPACIÓN: UNA INFORMACIÓN NECESARIA

Cuando la nueva ley de Estadística está a punto de ser sancionada por el Parlamento español y el proyecto de modificación de las estadísticas del movimiento natural de la población suficientemente avanzado como para entrar en vigor durante el próximo año, vale la pena considerar uno de los aspectos más olvidados de nuestras estadísticas oficiales de mortalidad. Se trata de la influencia de los factores sociales, en general, y de la ocupación en particular sobre la frecuencia y el calendario de presentación de las defunciones.

Los trabajos preparatorios para la reforma de los impresos en los que se recogen los datos de nacimientos y defunciones, diseñados conjuntamente por un equipo de estadísticos y de sanitarios suponen una notable simplificación de los procedimientos actuales de los que cabe esperar una mejora sustancial en la calidad de la información disponible¹. No obstante, se propone renunciar a la recogida de datos de ocupación y de profesión, como consecuencia, entre otras razones, del escaso uso que de ellos se ha hecho hasta el momento, debido a la poca fiabilidad de los datos o a la mera ausencia de consignación en los boletines estadísticos de defunción (Gispert, datos no publicados).

El grupo de trabajo, del que formó parte este editorialista, propuso como alternativa la incorporación de la variable nivel de estudios como indicador social, debido a las ventajas prácticas de su uso en estos momentos.

El interés de la información sobre la ocupación y la profesión es sin embargo, suficiente, como veremos más adelante, para intentar superar las limitaciones coyunturales de la variable profesión en nuestro país y, por ello, para considerar nuevamente su reintroducción cuando sea posible.

La experiencia británica

Por ello es oportuna la revisión de Sanjosé y Gispert de la experiencia británica que se publica en este número de la *Gaceta*². Aunque la situación actual de la Oficina de estudios y censos de población (OPCS) de Inglaterra y Gales no es la mejor, más de 150 años de funcionamiento tienen un notable valor didáctico.

Una vez declarado obligatorio el registro universal de nacimientos y defunciones, William Farr explicaba la finalidad de esta iniciativa³ que pretendía averiguar las leyes de la vitalidad y de la mortalidad y, por eso, conocer la influencia de los factores sociales y de la ocupación en la magnitud y en el calendario de las muertes que se producían.

El desarrollo de las estadísticas de mortalidad y su utilización en el análisis epidemiológico debe muchas de sus aportaciones a la experiencia inglesa. Entre ellas destacan las aplicaciones al estudio de las influencias sociales sobre la salud. Desde la consideración de la profesión como variable independiente, para analizar la posible sobremortalidad en determinadas ocupaciones, hasta su empleo como indicador social. De manera que, clasificando las defunciones según el estrato social del difunto, se obtienen tasas específicas por estratos, quedando de manifiesto las desigualdades sociales en mortalidad.

Naturalmente, la validez de los resultados obtenidos depende de la existencia de errores y sesgos en la recogida y en el análisis de los datos y, desde luego, de la exactitud de las interpretaciones de estas influencias, que en ocasiones son complejas, puesto que la ocupación de un individuo varía a lo largo de su vida y también lo hace el significado social de su profesión.

Por ello tiene un valor aleccionador la evolución experimentada por el análisis de la profesión y del estado social en los estudios ingleses de mortalidad que consideran Sanjosé y Gispert.² La introducción de ajustes, la ampliación de los datos utilizados o, quizás lo más relevante, el diseño del «estudio longitudinal» en el que, a partir de una muestra del 1% del censo, se analizaban conjuntamente datos demográficos y sanitarios procedentes de diversos registros individuales. Esta iniciativa, considerada por Sir Donald Acheson como la más relevante aportación desde la creación del Registro⁴, ha producido gran cantidad de información para el análisis de las desigualdades en el ámbito de la salud.

Pero a pesar de esta positiva trayectoria y de las recomendaciones del informe conjunto de los Reales Colegios de Médicos y de Patólogos⁵ el tratamiento recibido por el último suplemento decenal de la mortalidad ocupacional⁶ ha sido decepcionante. Y el futuro del «estudio longitudinal» es incierto. Si esta situación merece comentario no es para sentirnos acompañados en el infortunio por los colegas ingleses, sino más bien para resaltar las implicaciones que supone a la política sanitaria. En efecto, la disminución del análisis de la relación entre ocupación y mortalidad y las limitaciones del acceso a los datos, que en la presente edición del suplemento citado no han sido publicados más que en microficha, supone una pérdida de proyección de este tipo de análisis en el debate sobre las desigualdades sociales y, en consecuencia, en la formulación de políticas de salud⁷. Razones formales sobre la poca fiabilidad de los datos no han disuadido a distintos y prestigiosos autores de la intención política de estas limitaciones⁸.

Como ocurre con tantas otras cuestiones, en nuestro país se plantea no iniciar un camino que otros desandan. Sin tener en cuenta que el bagaje de unos y otros es incomparable y que, por suerte, en otras latitudes como en los Estados Unidos⁹ se aborda en la actualidad una reforma intensa de las estadísticas de mortalidad. De hecho, los estudios sobre los factores socio-demográficos y las defunciones tienen también allí una notable tradición como muestra el estudio retrospectivo del período 1961-68.¹⁰

Según los datos recogidos por Gispert, la situación española es muy precaria e incluso parece haberse producido un notable deterioro en la cobertura de la variable profesión de los boletines estadísticos de defunción. Aunque ello tal vez se deba a un artefacto en la manipulación de los datos en los años anteriores. Sabido es que un criterio tradicionalmente empleado con las variables no informadas en las estadísticas de la población es el de la imputación automática, de forma que a los valores ignorados se adjudique aleatoria o sistemáticamente un supuesto valor de acuerdo con los que proporcionan los datos realmente obtenidos.

Impacto de la falta de información ocupacional

La influencia de los factores sociales y laborales sobre la mortalidad prematura es ahora tanto o más importante que en la época de Farr. Incluso se han desarrollado indicadores de mortalidad que, como se pretende con las causas llamadas de mortalidad innecesariamente prematuras y sanitariamente evitables (MIPSE), permitan la vigilancia epidemiológica de las causas de muerte relacionadas con la ocupación; los denominados Acontecimientos Sanitarios Centinela (ocupacionales)^{11, 12}. De ahí el interés estratégico que supone la detección y la cuantificación de aquellas variables que explican la presencia, la persistencia y la magnitud de los problemas de salud. Siempre que exista la voluntad o la posibilidad de que tales análisis puedan

usarse en el diseño de las políticas sanitarias. Porque sin esa voluntad los conocimientos epidemiológicos se reducen a un ejercicio académico o, todo lo más, de denuncia.

Las sociedades científicas como la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) tienen, a mi modo de ver, la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta cualificada a las preguntas siguientes: ¿Son aprovechables las estadísticas del movimiento natural de la población para analizar la influencia de la profesión y de los factores sociales en los fenómenos de salud? ¿Cómo puede mejorarse la cobertura y la calidad de la información así obtenida? ¿Cómo, entonces, se deberían recoger, clasificar y analizar tales datos? ¿Cuáles son el coste y el beneficio previsibles de tal procedimiento?

Si las respuestas a estas interrogantes fueran negativas podría plantearse, más allá de la retórica, un procedimiento alternativo basado en la investigación específica, mediante diseños exprofeso, de la relación entre los factores sociales y la salud.

Estoy convencido que es posible incluir la variable profesión en los boletines estadísticos de defunción, siempre que, como forzosamente deberá hacerse para mejorar la calidad de los otros datos que figuren en los impresos, se establezca un procedimiento de control de calidad y se consiga que rellenar el formulario no sea un mero trámite burocrático. A mayor abundamiento, parece conveniente plantear una modificación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones de forma que se facilite el estudio de la influencia de la profesión en nuestro país. Partiendo de esa clasificación y de acuerdo con la experiencia británica, Domingo y Marcos¹³ muestran las posibilidades a nuestro alcance para desarrollar indicadores de clase social útiles en las investigaciones epidemiológicas. Este procedimiento, no obstante, algunas limitaciones, que se ponen de manifiesto en la creación de un sexto grupo integrado por las personas que no pueden ser objeto de clasificación según su ocupación.

Recientemente, Liberatos *et al.*¹⁴ han efectuado una excelente revisión sobre la medida de la clase social en epidemiología, considerando los distintos indicadores utilizados. Entre los indicadores simples, la educación y la renta son, por este orden, los más empleados. La elección de uno u otro depende, según los autores, de criterios tales como la relevancia de los conceptos, el papel de la clase social, la aplicabilidad, las variaciones temporales, la validez, la simplicidad o la comparabilidad con otros estudios.

La necesidad de disponer de una propuesta solvente para estudiar la influencia de la clase social en general, y de la ocupación en particular, no debe entenderse, como una invitación a retardar la aplicación de la reforma en curso. Lo más importante es la rápida mejora de la calidad de los datos de base y a todos nos conviene que ésta se incremente cuanto antes.

En la eventualidad de que se dispusiera de una propuesta factible antes de la aplicación de los nuevos cuestionarios, previsiblemente vigentes a partir de 1990, se podría reconsiderar, incluso, su utilización. En cualquier caso, la existencia de una propuesta como la que se demanda, implica la posibilidad efectiva de emplear los datos de ocupación y de profesión, ahora o cuando, como consecuencia de las necesarias revisiones periódicas, se produzcan nuevas modificaciones de los impresos del movimiento natural de la población.

Todo ello no tiene porqué sustituir o retardar la existencia de estudios e investigaciones específicos. Al contrario, una explotación rigurosa y puntual de la información rutinaria acostumbra a constituir la mejor base para formular primero y contrastar después hipótesis precisas y detalladas.

Andreu Segura Benedicto

Bibliografía

1. Grupo de trabajo. *Propuesta de modificación de los impresos del Movimiento natural de la*

(continúa en la p. 312)